

N/REF: 0033/2023

El proyecto remitido tiene por objeto regular la composición y el funcionamiento de la Sección Segunda de Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, al que se refieren los artículos 193 y 195 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, así como desarrollar su régimen jurídico y el aplicable a la función que tiene legalmente encomendada.

De este modo, procede a la actualización del régimen jurídico recogido en el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, adaptándolo a las sucesivas modificaciones operadas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y que afectaban a su contenido.

El presente real decreto se ha introducido como una “Reforma” a llevar a cabo en el marco del Componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la “Revalorización de la industria cultural” (C24.R2), que, a su vez, ha quedado plasmado como el HITO 353 de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, referente a la entrada en vigor de medidas legislativas y reglamentarias para reforzar los derechos de autor y derechos conexos (CID, por sus siglas en inglés) y que, por tanto, debe llevarse a cabo antes de 31 de diciembre de 2023.

I

Esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse en sucesivas ocasiones en relación con los tratamientos de datos de carácter personal que pueda realizar la Comisión de Propiedad Intelectual, a partir del informe 14/2010, referente al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que se analizaba la modificación que introducía en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información para incorporar la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual entre los principio que podrían justificar la adopción de medidas de interrupción de la prestación de un determinado servicio de la sociedad de la información así como la facultad de los órganos competentes para requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, centrándose específicamente en el análisis de la comunicación de los datos identificativos del titular de una

determinada dirección IP para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Posteriormente, en el informe 253/2011 se analizó el contenido del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, el cual fue objeto de informe favorable, incluyendo un precepto específico referido a la aplicación de la normativa sobre protección de datos personales entonces vigente.

Y en los informes 299/2013 y 264/2017 se analizaron las sucesivas modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que, en cuanto afectaban a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, tenían un carácter eminentemente procedimental, tal y como se reflejaba en el informe 264/2017:

VII

Por otra parte, el Anteproyecto establece el régimen de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual dentro del Título V del Libro Tercero, que en su mayor parte reproduce las disposiciones actualmente vigentes, introducidas por la reforma operada por la ya mencionada Ley 21/2014, aunque alterando la numeración de sus preceptos.

Como ya se indicaba al informar la mencionada reforma del Texto Refundido, en el ya citado informe de 24 de julio de 2013 la reforma introduce, en el punto al que se está haciendo referencia, y en particular en lo que atañe a la Sección Segunda de dicha Comisión, previsiones de carácter esencialmente procedimental, relacionadas con el modo en que las medidas de salvaguarda podrán ser adoptadas, introduciendo, como se indicaba entonces “medidas específicas en exigencia de colaboración para la efectividad de las decisiones adoptadas en caso de que, desatendida la solicitud de la Comisión, se adopte, en los términos establecidos en el artículo 122 bis de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, la autorización judicial para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual”.

La única disposición directamente relacionada con la aplicación de las normas de protección de datos es el artículo 195.9 del Anteproyecto, según el cual “el tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, y, en particular, en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas”.

El contenido de dicha previsión no es sino resultado de la propuesta contenida en el tan citado informe de 24 de julio de 2013, en que se señalaba lo siguiente:

“En relación con estas previsiones simplemente resulta preciso traer a colación lo ya indicado por esta Agencia en su informe de 8 de junio de 2011 en relación con el tratamiento de los datos llevado a cabo por la Sección Segunda de la Comisión y plasmado en la previsión contenida actualmente en el artículo 13.5 del Real decreto 2889/2011, de 30 de diciembre, que dispone que “El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en particular, en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas”, por lo que se considera conveniente que esta disposición fuera incorporada, como un nuevo apartado 9, al artículo 158 ter del Anteproyecto, por cuanto contiene una salvaguarda en defensa del derecho fundamental consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución y las normas de protección de datos de carácter personal.”

Por ello, procede informar favorablemente el precepto ahora analizado

II

En el momento de la emisión del presente informe, el marco normativo aplicable a los tratamientos de datos de carácter personal está constituido, con carácter general, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

De este modo, el proyecto procede a actualizar la referencia a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales e, el apartado 5 de su artículo 6, al regular el funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión:

5. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de los datos relacionados con las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en particular, en sus artículos 10 y 27 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas y en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

En cuanto a la cita que el mismo incorpora de la Ley Orgánica 7/2021, la misma solo resulta de aplicación a los tratamientos de datos personales que se lleven a cabo por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, por lo que tal y como señalábamos en nuestro informe 29/2020, *“el artículo 1 del Anteproyecto tan sólo puede interpretarse en relación con las infracciones y sanciones penales, de manera que dado que el objeto de la Directiva es regular las normas relativas a la protección de las personas físicas respecto de los tratamientos de sus datos personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación detección o enjuiciamiento infracciones penales o de ejecución de infracciones penales, “incluidas” la protección y la prevención frente a las amenazas contra seguridad pública, dicha referencia a la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública sólo puede referirse a aquellas amenazas que constituyan delito. Cualquier tratamiento en relación con la prevención de amenazas a la seguridad pública que puedan constituir infracciones administrativas se regulará conforme al RGPD, que establece mayores derechos para los interesados”*.

Por consiguiente, la misma únicamente resultará de aplicación en cuanto se trate de tratamientos de datos personales realizados por las autoridades competentes designadas en la Ley Orgánica 7/2021 y a los fines determinados en la misma, por lo que, cuando se trate de supuestos de colaboración con dichas autoridades competentes y como señalábamos en nuestro informe 29/2020:

“el tratamiento llevado a cabo por el sujeto obligado a comunicar los datos a una autoridad competente está sometido a las disposiciones del Reglamento general de protección de datos y no a las de la Directiva, sin perjuicio de que una vez comunicados los datos a la autoridad competente sí será aplicable a ese tratamiento lo establecido en la Directiva, pero sin que esa aplicación implique que el sujeto obligado se encuentra sujeto a las previsiones de ésta última, toda vez que la comunicación se habrá llevado a cabo al amparo del artículo 6.1 c) del reglamento”.

Por lo tanto, no encontrándose la Sección Segunda de la Comisión entre las autoridades competentes a los fines previstos en la Ley Orgánica 7/2021, y sin perjuicio de que a la misma le pueda resultar de aplicación el deber de colaboración previsto en su artículo 7, que es ajeno al objeto del presente proyecto, debería suprimirse la referencia a la Ley Orgánica 7/2021, por lo que el apartado 5 del artículo 6 debería quedar con la siguiente redacción:

5. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de los datos relacionados con las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en particular, en sus artículos 10 y 27 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas.

III

Comenzando con los tratamientos de datos de carácter personal que se puedan realizar por la Sección Segunda de la Comisión, los mismos quedarían legitimados, con carácter general, conforme a lo previsto en la letra e) del artículo 6.1 del RGPD: “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”, viniendo la competencia atribuida, conforme prevé el artículo 8.2. de la LOPDGDD, por una disposición con rango de ley (artículo 195 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).

Asimismo, tal y como analizamos en nuestro informe 74/2019, dichos tratamientos podrán quedar legitimados por la base jurídica prevista en la letra

c) del artículo 6.1. del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”) en aquellos casos en los que una norma con rango de ley imponga a la Administración una obligación específica de dar, hacer o no hacer, que implique el tratamiento de datos de carácter personal, y diferente del deber jurídico genérico de la Administración de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye para servir con objetividad al interés público (artículo 103 de la Constitución). Esta base jurídica resultará, igualmente aplicable, cuando se impongan obligaciones específicas de colaboración a determinados sujetos, como es el supuesto del artículo 8.2. de la LSSI o deber de colaboración impuesto a los servicios de intermediación, los servicios de pagos electrónicos o de publicidad por el artículo 195.5 de la LPI.

Por otro lado, deberán respetarse todos los principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, pudiendo establecerse cautelas específicas respecto de del principio de limitación de la finalidad, minimización e integridad y confidencialidad, incluyendo en este último caso una referencia al nuevo Esquema Nacional de Seguridad recientemente aprobado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, cuyo artículo 3 incorpora la prevalencia de su normativa específica en aquellos sistemas que traten datos personales.

Asimismo, deberá identificarse adecuadamente el papel que, desde la perspectiva del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales corresponda a los intervinientes en los correspondientes tratamientos. Igualmente, deberá determinarse con precisión la forma en que se cumplirá con el deber de información previsto en la normativa sobre protección de datos personales.

El proyecto objeto de informe ha tenido en cuenta estas consideraciones, así como el criterio reiteradamente manifestado por esta Agencia sobre la necesidad de que, en los supuestos en que se introduzcan regulaciones en nuestro ordenamiento jurídico que tengan especial trascendencia en los tratamientos de datos de carácter personal, se proceda previamente a un análisis de los riesgos que puedan derivarse de los mismos, incluyendo en la MAIN un estudio sistematizado del impacto que en el derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados han de tener los distintos tratamientos de datos que prevé la ley. Incluso, en supuestos determinados como podría ser el presente, la necesidad de realizar la Evaluación de impacto en la protección de datos personales a la que se refiere el artículo 35.10 del RGPD.

De este modo, a propuesta de la Delegada de Protección de Datos del ministerio proponente la MAIN ha incluido en el análisis de otros impactos el impacto en materia de protección de datos personales, (apartado 7.2.) adjuntando como anexo el análisis de riesgos realizado con la herramienta Evalúa Riesgo RGPD, con la que se obtuvo como valoración del riesgo residual

un riesgo bajo, y en el que se describen las mitigaciones que se aplican para minimizar el impacto de las fuentes de riesgo existentes.

Asimismo, se ha incluido en el proyecto de real decreto una disposición adicional única con el siguiente contenido:

Disposición adicional segunda. Protección de datos de carácter personal.

1. Los tratamientos de datos personales regulados en el presente real decreto se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los derechos de acceso, rectificación y supresión se ejercitarán conforme a la normativa referida en el párrafo anterior, sin perjuicio de las especificidades que se recojan en su caso en los apartados siguientes.

2. El tratamiento de los datos personales relativos tanto al solicitante como al servicio de la sociedad de la información contra el que se solicita el inicio del procedimiento y al prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información al que se refiere el artículo 15 del real decreto en relación con el Anexo del mismo tendrá por finalidad determinar si procede iniciar el correspondiente procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que se hayan denunciado como vulnerados y, en su caso, iniciarlo y resolverlo, de acuerdo con los artículos 17 a 24 y 25.

Responsable y Base jurídica del tratamiento: Es responsable del tratamiento el centro directivo competente en materia de propiedad intelectual.

La base jurídica del tratamiento es el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Minimización de datos: los datos recogidos se limitarán, en el caso del solicitante, al nombre, apellidos, nacionalidad, número de identificación (DNI, NIE o N° de Pasaporte), nombre o denominación social del representante, en su caso, así como el título con base en el que se ostenta esa representación y el documento identificativo de aquel, el domicilio a efectos de notificaciones, el teléfono y la dirección de correo electrónico. En el caso del servicio de la sociedad de la información contra el que se solicita el inicio del procedimiento, así como en el del prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la

información, cuando se trate de datos de una persona física, los datos recogidos se limitarán a al nombre del responsable el servicio, domicilio social, teléfono, correo electrónico y datos de la inscripción en el Registro Mercantil.

Fuentes y exactitud de los datos: Los datos personales serán recabados de los denunciantes a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte o, en caso de tratarse de personas físicas titulares de derechos de propiedad intelectual, o las que tengan encomendada la representación de estas, que no tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, mediante la denuncia en papel, presentada a través del Registro del Ministerio de Cultura y Deporte con el modelo de denuncia que figura en el Anexo del Real Decreto referido.

El responsable del tratamiento garantizará la exactitud de los datos tanto por la fuente de procedencia en virtud de lo establecido en la normativa de aplicación.

Transparencia: En virtud de la referida procedencia de los datos obtenidos, las obligaciones de información a los interesados a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se ajustarán al hecho de que la misma sea conocida por el interesado cuando hubiera sido facilitada por el mismo.

Cuando la información no se hubiera obtenido de los interesados se informará en los términos del artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la comunicación de esta información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, por referirse a tratamientos con fines de investigación histórica o estadísticos, en cuyo caso se adoptarán las medidas adecuadas para hacerla pública, y específicamente en la página web del Ministerio competente se realizará la publicación o las formas de acceder a esa información.

Conservación y seguridad de los datos: En virtud de la finalidad del tratamiento, la conservación de los datos será indefinido.

El responsable del tratamiento garantizará la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes en cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y la Orden CUD/1313/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.

El ejercicio de derechos para las personas físicas sujetas a la normativa de protección de datos se garantizará conforme a la normativa general de protección de datos.

Estos datos sólo serán comunicados a otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos, de acuerdo con

la previsión de ejecución subsidiaria de la resolución prevista en los artículos 23 y 24, y se limitarán a los datos ya incluidos en el expediente administrativo y a los datos de identificación de los interesados en el procedimiento, así como de los prestadores de los servicios de intermediación de la sociedad de la información cuya colaboración sea necesaria para la ejecución subsidiaria de las medidas acordadas en la resolución.

Esta Agencia valora muy positivamente tanto la inclusión del análisis del impacto en la protección de datos personales como la citada disposición adicional, respecto de la cual se realizan las siguientes observaciones:

a) Existe una reiteración respecto al ejercicio de los derechos de los afectados en el párrafo segundo del apartado 1 y en el párrafo 10 del apartado 2, sin que sea posible establecer límites a dichos derechos en virtud de una norma reglamentaria.

b) El responsable del tratamiento, en cuanto sección del órgano colegiado que tiene atribuida específicamente la competencia por el artículo 195 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual es la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

c) La base jurídica principal del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como, en su caso, para el cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.1.c) y 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679.

d) En relación con el principio de minimización de datos, el número de teléfono y, en su caso, la dirección de correo electrónico de quienes no están obligados a relacionarse por medios electrónico, al no ser un dato necesario al existir otros datos de contacto, su aportación debería tener carácter voluntario.

e) En cuanto a la conservación de los datos personales, debe tenerse en cuenta la necesidad de su conservación derivada de la aplicación de la normativa sobre Patrimonio Histórico Español y la normativa archivística pública.

f) Respecto de la comunicación de los datos, debe tenerse en cuenta su comunicación a la autoridad judicial cuando sea preciso recabar la autorización de ejecución subsidiaria.

Por último, debe revisarse la cláusula de protección de datos personales correspondiente a los modelos del Anexo, para adecuarla al

contenido del artículo 13 del RGPD, no siendo procedente la cita del artículo 5 de la LOPDGDD.